Señores

H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL

E. S. D.

REF. Acción de Tutela

ANA DOLORES URIBE DE APARICIO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.379.378 de San Gil, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito me permito presentar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra del **JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL**, por la vulneración de mi Derecho Fundamental al **DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia; conforme a lo siguientes:

HECHOS

1. Yo, ANA DOLORES URIBE DE APARICIO, concedí poder a la abogada Vilma Cárdenas Macías el día 15 de diciembre de 2009, con el fin de que iniciara y llevarla hasta su terminación, proceso ordinario de Saneamiento de la Pequeña Propiedad Rural, en contra del señor Genero Acelas Morales y otros.
2. De conformidad con el poder otorgado, el día 18 de mayo de 2011, fue radicada demanda de Saneamiento de Pequeña Propiedad Agraria, propuesta por ANA DOLORES URIBE DE APARICIO en contra de GENARO ACELAS MORALES y otros, que correspondió, conforme a Acta de Reparto visible a folio 17 del expediente judicial, al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, tramitado bajo el radicado número 2011-00108-00
3. La referida acción judicial pretendía se declarara la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, del lote de terreno rural denominado BUENOS AIRES, ubicado en la Vereda La Laja del Municipio de San Gil, junto con sus mejoras, anexidades existentes, usos, costumbres y servidumbres legalmente constituidos, predio de un área aproximada de una hectárea y cuarta (1/4 hras), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 319-6124 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del Círculo de San Gil.
4. El día 20 de mayo de 2011, el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, profirió Auto Admisorio de la demanda, ordenando el emplazamiento de los demandados e indeterminados, y el registro de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de San Gil, visible a folios 18 y 19 del expediente.
5. Por medio de Auto del 06 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil AVOCÓ conocimiento del referido proceso, atendiendo lo establecido en Acuerdo No. PSAA12-9185 de enero 30 de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura. (Folio 23)

6. El 24 de enero de 2014, la abogada Vilma Cárdenas Macías, radicó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, memorial SUSTITUYENDO el poder otorgado inicialmente por mí a ella, a favor del abogado JOSÉ DE JESÚS PIMIENTO REMOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.301.404 de Bogotá y Tarjeta Profesional 129.146 del Consejo Superior de la Judicatura, y conforme a ello se le reconoció personería jurídica por el Despacho, por auto del 29 de enero de 2014 (visible en folios 62 y 63).
7. A través de Constancia Secretarial del 14 de agosto de 2014, en folio 72, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil informa que *mediante circulares Nros. 017 y 018 de 2014, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura informa que el Dr. JOSE DE JESUS PIMIENTO REMOLINA quien funge en este proceso como apoderado judicial de la demandante, ha sido sancionado por seis (6) meses desde el 14 de agosto de 2014 y por dos (2) meses desde el 25 de agosto de 2014.*
8. En razón a lo anterior, por medio de Auto del 03 de septiembre de 2014, el Juzgado refiere en primer lugar, la suspensión de la profesión de abogado de JOSÉ DE JESÚS PIMIENTO REMOLINA, ante lo cual dispone CITAR a la demandante, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS designe nuevo apoderado si lo estima del caso. Indica igualmente la providencia, en el inciso segundo, que: *“A la demandante ANA DOLORES URIBE DE APARICIO se le surtirá la citación ordenada mediante telegrama u oficio dirigido a la dirección indicada por el apoderado de la demandante en memorial visto a folio 14 del cuaderno 1”.* (Visible a folio 73).
9. Sorpresivamente para la suscrita, sin siquiera haberseme realizado la notificación que ordenaba el Auto del 03 de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, ordenó por Auto del 17 de septiembre de 2014, dar traslado a las partes para alegar por el término común de ocho días.
10. Esta notificación NUNCA se me realizó como se puede observar en el mismo expediente que se encuentra foliado por el mismo Despacho, pues después del Auto que ordena se me requiera para designar apoderado judicial, sólo se observa la providencia que corre traslado para alegar y seguidamente la Sentencia de Primera Instancia, sin encontrarse prueba siquiera sumaria que demuestre que se me realizó la notificación, porque esto no sucedió jamás
11. No solo lo anteriormente referido transgredió mis derechos fundamentales, pues no contaba con abogado designado para que presentara alegatos a mi favor, sino que, por medio de SENTENCIA del 17 de octubre de 2014, SIN CONTAR LA SUSCRITA CON APODERADO, se denegaron todas y cada una de las pretensiones de la demanda, y se ordenó la cancelación de la inscripción de la demanda, entre otros.
12. La citada SENTENCIA fue notificada por Edicto desde el día 23 de octubre de 2014, pero el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, no tuvo en cuenta que yo, ANA DOLORES URIBE DE APARICIO no tenía un abogado que me representara, y simplemente archivó el expediente, porque al no contar con un profesional de derecho que defendiera mis garantías constitucionales y legales,

ni se radicaron alegatos de conclusión ni mucho menos se impetró Recurso de Apelación en contra de la decisión de Primera Instancia.

13. Para mi desagradable sorpresa, en vista de que no contaba con ninguna información sobre el referido proceso judicial, y a espera de la decisión de adjudicación de mi finca, me acerqué al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, solicitando información del proceso, el pasado 24 de mayo de 2022, a lo cual recibí copias del expediente, quedando aterrada de que el mismo fue archivado con una decisión negativa a mis pretensiones, y yo nunca me enteré, ni mucho menos tuve un abogado que me representara.
14. Es necesario que el Honorable Tribunal analice en detalle esta Acción de Tutela y tenga en cuenta que hasta el día 24 de mayo de 2022, me enteré del archivo de mi proceso y todo lo que pasó con él, por lo cual la Tutela la presento hasta la fecha, porque no tenía conocimiento de todo lo que había sucedido, pues como está demostrado nunca se me notificó lo acontecido.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Se tutele a mi favor mi Derecho Fundamental al **DEBIDO PROCESO JUDICIAL EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, vulnerado por la acción del **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL**, con la expedición de la **SENTENCIA** del 17 de octubre de 2014, dentro de la Demanda de Saneamiento de Pequeña Propiedad Agraria, propuesta por ANA DOLORES URIBE DE APARICIO en contra de GENERO ACELAS MORALES y otros, tramitada bajo el radicado 2011-00108-00; aún sin contar con un abogado que representara mis intereses, a pesar de que el mismo Juzgado ordenó se me notificara la necesidad de nombrar un profesional del derecho, notificación que nunca se me realizó.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL**, declarar la **NULIDAD y/o DEJAR SIN EFECTOS**, todo lo actuado, desde la expedición del Auto del 17 de septiembre de 2014, por el cual se dio traslado a las partes para alegar por el término común de ocho días, y se cumpla con lo ordenado en el Auto del 03 de septiembre de 2014, por el cual se ordena CITAR a la demandante, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS designase nuevo apoderado, si lo estima del caso, y se reanudase el proceso en este término, ordenándose la nulidad igualmente de la decisión de primera instancia.

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS Y FUNDAMENTACIÓN DE SU VIOLACIÓN

Dentro de la presente Acción Constitucional de Tutela, se avizora la vulneración del derecho AL DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, a mi favor, **ANA DOLORES URIBE DE APARICIO**, con la decisión emitida por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL**, dentro de la Demanda de Saneamiento de Pequeña

Propiedad Agraria, propuesta por ANA DOLORES URIBE DE APARICIO en contra de GENERO ACELAS MORALES y otros, tramitada bajo el radicado 2011-00108-00; causadas desde la expedición del Auto del 17 de septiembre de 2014, por el cual se dio traslado a las partes para alegar por el término común de ocho días, y sin haber dado cumplimiento a lo ordenado en el Auto del 3 de septiembre de 2014, por el cual se ordenaba CITAR a la demandante, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS designara nuevo apoderado, y aun así, se emitió Sentencia de Primera Instancia el 17 de octubre de 2014, sin que la suscrita contara con un abogado que representara mis intereses, por lo cual ante mi desconocimiento, ni siquiera se presentaron alegatos de conclusión a la decisión de primera instancia ni se apeló esta Sentencia.

El Derecho fundamental al DEBIDO PROCESO en conexidad con el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, se encuentra claramente vulnerado en mi perjuicio, pues el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL, omitió su deber de notificarme la orden contenida en el Auto del 03 de septiembre de 2014, el cual disponía *CITAR a la demandante, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS designe nuevo apoderado si lo estima del caso*. Indica igualmente la providencia, en el inciso segundo, que: *“A la demandante ANA DOLORES URIBE DE APARICIO se le surtirá la citación ordenada mediante telegrama u oficio dirigido a la dirección indicada por el apoderado de la demandante en memorial visto a folio 14 del cuaderno 1”*.

Esta notificación NUNCA se me realizó como se puede observar en el mismo expediente que se encuentra foliado por el mismo Despacho, pues después del Auto que ordena se me requiera para designar apoderado judicial, sólo se observa la providencia que corre traslado para alegar y seguidamente la Sentencia de Primera Instancia, sin encontrarse prueba siquiera sumaria que demuestre que se me realizó la notificación, porque esto no sucedió jamás.

Es de gran relevancia acudir a la acción constitucional de Tutela, dado que es el único mecanismo efectivo, para defender la protección de mis Derechos Fundamentales. Así lo consagra la Sentencia T- 149 emitida por la Corte Constitucional colombiana, el 19 de marzo de 2013.

“De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En la misma línea, el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.¹

---

¹ COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá D.C., marzo 19 de 2013. (Subrayado fuera del texto)

Respecto al Derecho Fundamental al Debido Proceso, la Corte Constitucional en extensa jurisprudencia ha establecido lineamientos para su defensa, así:

“La Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso comprende: “a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa...”

La jurisprudencia de esta Corte ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.

*Existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) **a impugnar las decisiones** y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.”²*

“...en verdad, lo que se propone el Constituyente es que en todo caso de actuación administrativa exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las personas. La extensión del derecho constitucional fundamental al debido proceso, a las actuaciones administrativas, busca garantizar la correcta producción de los actos administrativos, razón por la cual comprende todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cubija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de

---

² Corte Constitucional. Sentencia T-010. M.P. Alberto Rojas Ríos. Bogotá D.C., enero 20 de 2017.

impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”³

La Honorable Corte Constitucional en variada jurisprudencia, como en Sentencia T-283/14, ha establecido respecto al derecho al acceso a la administración de justicia, que:

“El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.”⁴

En concordancia con lo anterior, con la presente Acción de Tutela, se propende porque a la suscrita, ANA DOLORES URIBE DE APARICIO, se tutele mi Derecho Fundamental al **DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, vulnerado por la acción del **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL**, con la expedición de la **SENTENCIA** del 17 de octubre de 2014, dentro de la Demanda de Saneamiento de Pequeña Propiedad Agraria, propuesta por ANA DOLORES URIBE DE APARICIO en contra de GENERO ACELAS MORALES y otros, tramitada bajo el radicado 2011-00108-00; aún sin contar con un abogado que representara mis intereses, a pesar de que el mismo Juzgado ordenó se me notificara la necesidad de nombrar un profesional del derecho, notificación que nunca se me realizó; y como consecuencia de lo anterior, se ordene al **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SAN GIL**, declarar la NULIDAD de todo lo actuado desde la expedición del Auto del 17 de septiembre de 2014, por el cual se dio traslado a las partes para alegar por el término común de ocho días, y se cumpla con lo ordenado en el Auto del 3 de septiembre de 2014, por el cual se ordena CITAR a la demandante, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS designe nuevo apoderado si lo estima del caso, y se reanude el proceso en este término, ordenándose la nulidad igualmente de la decisión de primera instancia.

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he presentado acción de tutela por los mismos hechos acá relatados.

PRUEBAS

1. Expediente contentivo de Demanda de Saneamiento de Pequeña Propiedad Agraria, propuesta por ANA DOLORES URIBE DE APARICIO

---

³ Corte Constitucional. Sentencia C-248. M.P. Mauricio González Cuervo. Bogotá D.C., abril 24 de 2013.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-283. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., mayo 16 de 2013.

en contra de GENERO ACELAS MORALES y otros, tramitada bajo el radicado 2011-00108-00 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, contentivo de 94 folios.

NOTIFICACIONES

El accionado recibe notificaciones en el E-mail:
j02cctosgil@cendoj.ramajudicial.gov.co

La suscrita, las recibirá en el correo electrónico: anadoloresuribe28@gmail.com

Del Honorable Tribunal Superior, atentamente,

(NO FIRMA)

ANA DOLORES URIBE DE APARICIO

C.C. 28.379.378 de San Gil